

Economía

El diálogo social se estanca por la división política y las elecciones

kioskoymas#comunicacion@confcuadros.com

La debilidad parlamentaria del Gobierno entorpece las mesas de negociación y complica los hitos comprometidos con Bruselas para cobrar los fondos europeos

G. R. P. / E. S. H. / R. P. C.
MADRID

2021 marcó un antes y un después para los agentes sociales en su forma de relacionarse entre sí. El terror mundial por la covid y la necesidad de actuar de manera urgente para evitar un colapso socioeconómico les obligó a debatir a un ritmo incesante, y a dejar de lado muchas de las cuitas que tradicionalmente dilatan cualquier conversación. Fruto de ese frenesí se firmaron 14 acuerdos sociales, coronados con una reforma laboral que contó con el consenso de todas las partes por primera vez en cuatro décadas.

Tres años después, la pulsión negociadora entre Gobierno, sindicatos y patronales se ha bajado hasta casi la parálisis. Algunas de las personas que vivieron y participaron en el éxtasis de 2021 consideran injusta la comparación con la situación actual. Recuerdan que desde entonces se han celebrado unas elecciones generales, o que en este año se entrelazan las vascas, catalanas y europeas, lo que ha dilatado mucho los tiempos. También que el grueso de lo que se discute hoy se deriva de lo acordado en aquel momento. Sin embargo, las segundas patas de esas reformas se mantienen aletargadas, llegando al punto de poner en riesgo el cumplimiento de algunos hitos con Bruselas, de los que depende, además, el cobro de los fondos europeos. Y todo ello con una mayoría parlamentaria más débil para el Gobierno, que necesita el apoyo de los nacionalistas de derechas (PNV y Junts) en cada votación.

En esa idea abunda Pepe Álvarez, secretario general de UGT: "No hay una parálisis, lo que ocurre es que teniendo en cuenta cuál es la situación parlamentaria, hay que medir mucho los acuerdos para que luego no



El presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. PABLO MONGE

se caigan". La debilidad del Gobierno de coalición para conformar mayorías es una carta que cada bando juega en función de sus intereses. "Nosotros pudimos utilizar a nuestro favor la fortaleza progresista que tuvimos en 2021 para presionar y no lo hicimos por responsabilidad", recuerda Unai Sordo, líder de CC OO.

Desde CSIF alertan de que "este país no puede aguantar mucho más la parálisis política del Ejecutivo". "Se está trabajando activa-

Muchas negociaciones actuales derivan de lo acordado durante 2021

mente en las mesas de negociación, con realización de propuestas", replican fuentes de la CEOE, que defienden que aunque no esté habiendo acuerdos, cada negociación "sigue su curso". El último gran pacto en el que participaron los empresarios fue el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), suscrito hace un año para compensar el golpe de la inflación.

El Ministerio de Seguridad Social reivindica que el diálogo social es una de sus "señas de identidad" y una "actividad permanente", con reuniones "prácticamente semanales". Una de las mesas más activas y en las que se han producido algunos avances, tiene que ver con las pensiones -de cuya resolución depende la recepción del cuarto pago de los fondos Next Generation,

unos 10.000 millones de euros-, donde Seguridad Social busca extender a nuevas profesiones los coeficientes reductores para que más trabajadores puedan jubilarse antes.

A pesar de que el departamento que dirige Elma Saiz ha esbozado ya algunos detalles, estas fórmulas siguen sin concitar con el apoyo de los sindicatos. "Dejan fuera a profesiones muy feminizadas", señaló tras el último encuentro Cristina Estévez de UGT. "Queda mucho camino por recorrer", dijo Carlos Bravo, de CC OO.

Fuentes de esta negociación recuerdan que algunos de los acuerdos de la anterior legislatura no llegaron hasta nueve o diez meses de conversaciones, lo que se discuten es de gran complejidad técnica y que aunque a veces no haya re-

uniones formales sí hay contactos "permanentes".

Trabajo también es protagonista. El ministerio que dirige Yolanda Díaz es criticado por los agentes sociales. El primer episodio se dio en enero, cuando Economía (aún en manos de Nadia Calviño) y Trabajo acordaron una reforma de los subsidios sin el concurso de empresarios o sindicatos, ante la urgencia de cumplir con el calendario de Bruselas. CC OO y UGT lo denunciaron en un comunicado. Pero el último pacto de Calviño y Díaz quedó en nada por el rechazo de Podemos a la reforma. Poco después sí se abrió la negociación con centrales y patronales, de momento sin conclusiones. El Gobierno aún no ha presentado un texto y hay varios aspectos lejos de resolución, según fuentes de la negociación.

Trabajo también lidera la discusión sobre el estatuto del becario. Díaz alcanzó un acuerdo con los sindicatos e incluso lo escenificó el 15 de junio, a menos de un mes de las elecciones generales. El texto pactado limitaba a un máximo de 480 horas las prácticas extracurriculares y obliga a las empresas a cubrir los gastos del estudiante si no hay remuneración. La norma nunca llegó al Consejo de Ministros por el rechazo del PSOE, lo que no ha sucedido con ningún otro acuerdo del diálogo social. Entonces, Moncloa dijo que el texto estaba "verde" y Economía que le faltaba "trabajo técnico" para ser más "equilibrado". Tras las elecciones los socialistas y Sumar acordaron sacarlo adelante, pero aún no hay avances ni garantías de que prospere. Ahora, la mayoría para abordar este cambio es más precaria y en lo que va de legislatura no se han celebrado reuniones.

Otro asunto en el que chocan PSOE y Sumar es la

reforma de la indemnización por despido. La pelea se recrudeció en las semanas previas a que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) resolviese que el sistema tasado español no está acorde con la normativa comunitaria. Aunque las dos formaciones políticas se comprometieron a reformar la indemnización en base a lo dictado por el CEDS, los socialistas muestran poco entusiasmo. Con estos mimbres, una vez se haga pública la resolución en verano, arrancará una negociación en la que sindicatos y patronal planteen posiciones contrapuestas. Y uno de los apoyos necesarios para el Ejecutivo, de nuevo Podemos, ya ha dicho que reclama que la indemnización vuelva a los 45 días (ahora son 33), lejos del planteamiento del PSOE o del que se espera de PNV y Junts.

El asunto laboral nuclear de la legislatura es la reducción de la jornada ordinaria a 37,5 horas, el eslogan del acuerdo de PSOE y Sumar. El plan inicial es hacer este recorte en dos fases: la primera en 2024, fijará la jornada máxima legal en 38,5 horas; y, la segunda, el año que viene, la dejará en 37,5 horas semanales. Los agentes sociales han apostado por una negociación bipartita, sin el Gobierno y confían en poder flexibilizar la medida para alcanzar un acuerdo. Si bien, tras los últimos encuentros, fuentes de la negociación apuntan a la existencia de discrepancias entre patronales, que estarían ralentizando estas conversaciones.

Por su parte, en Trabajo no se resignan a quedarse al margen y siguen convocando a patronal y sindicatos a discutir, tal y como hacen los agentes sociales en el plano bilateral, no solo sobre la reducción de la jornada, sino también sobre el control horario, el de horas extras y la distribución del tiempo de trabajo. En este punto, Trabajo ha dejado ya claro su intención de obligar a que el registro horario de los trabajadores sea por medios digitales para que pueda acceder de forma remota la Inspección de Trabajo.

El único acuerdo sustancial que Trabajo ha logrado sacar adelante esta legislatura es la subida del SMI, de un 5% hasta 1.134 euros al mes. Lo hizo sin el concurso de los empresarios, por cuarta vez consecutiva.